



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA.

Guadalajara, Jalisco, a **26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.**

VISTOS los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa radicado con el número de expediente 213/2023, promovido por **JOEL PÉREZ SALINAS**, en contra de las Autoridades **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, y la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, y:**

RESULTANDO:

1. Por acuerdo de fecha **3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, se recibió el escrito de demanda presentado por **JOEL PÉREZ SALINAS**, por medio del cual se le tuvo por su propio derecho interponiendo juicio administrativo de nulidad, el cual, por haber sido promovido en tiempo y forma, se admitió en contra de las Autoridades Demandadas **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, y la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y señalando como resoluciones administrativas impugnadas:

- 1. El cobro por el refrendo anual vehicular relativo a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, así como la totalidad de sus accesorios.*
- 2. Las cédulas de notificación de infracción identificadas con los números de folio 113/7137509, 113/294847553, 113/275716251, 113/295923121, 113/280455296 y 113/7137509.*

Así mismo se admitieron las pruebas ofertadas por no ser contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho. Se requirió a las autoridades demandadas para que al momento de dar contestación a la demanda remitiera copia certificada de las resoluciones impugnadas. Con las copias simples del escrito de demanda y anexos se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que dentro del término de **10 DIEZ** días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra apercibida que de no hacerlo así se le tendrían por ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultasen desvirtuados.

2. Por auto de fecha **13 TRECE DE ABRIL DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, se tuvo por recibido el escrito presentado por **CELIA BERTHA ÁLVAREZ NÚÑEZ**, en su carácter de **DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en su contra por la Accionante, así mismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.

De igual manera se tuvo por recibido el escrito signado por **DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR**, quien se ostentó en su carácter de **TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, por medio del cual se le tuvo produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en contra de la Secretaría a la que representa, y por no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas en esos momentos por su propia naturaleza.

También se tuvo por recibido el escrito signado por **JOSÉ ANTONIO ROGELIO ASCENCIO RÍOS**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, por medio del cual se le tuvo produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en contra de la Autoridad a la que representa, y por no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas en esos momentos por su propia naturaleza.

En ese mismo tenor, se tuvo por recibido el escrito signado por **ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**, por medio del cual se le tuvo



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en contra de la Autoridad a la que representa, y por no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas en esos momentos por su propia naturaleza.

Finalmente, visto el estado procesal que guardaban los autos, tomando en consideración que no existía cuestión alguna pendiente por resolver, ni pruebas pendientes por desahogar, se ordenó traer los autos a la vista de las partes para que en el término de **3 TRES** días formularan por escrito sus alegatos y una vez transcurrido en demasía dicho periodo; se ordenó poner los autos a la vista del Magistrado Presidente de esta Sexta Sala Unitaria para que fuese dictada la Sentencia Definitiva.

CONSIDERANDO:

I.- COMPETENCIA. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido por los artículos **52, 56, 57, 65, 67** y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; **1, 2, 3, 4, 5 y 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; **1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II.- PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora **JOEL PÉREZ SALINAS**, quedó debidamente acreditada en autos, de conformidad con el artículo **36 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Por su parte, la personalidad de la Autoridad **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, quedó acreditada en autos pues en su representación legal acudió a juicio **ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**. De la misma manera, la personalidad de la **SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó plenamente acreditada en actuaciones pues acudió a juicio por medio de su Titular, ciudadano **DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR**. A su vez, la personalidad de la autoridad demandada la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos, en virtud de que la funcionaria **CELIA BERTHA ÁLVAREZ NÚÑEZ**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTORA DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, compareció en su representación legal. También quedó plenamente acreditada en autos la personalidad de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, pues en su representación legal compareció a juicio **JOSÉ ANTONIO ROGELIO ASCENCIO RÍOS**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, lo anterior en términos de los numerales **6 y 44 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

III.- VÍA. La Vía Administrativa elegida por la parte Actora es la indicada, toda vez que se trata de combatir un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos **1º, 2º, 9º** y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

IV.- ACCIÓN. La acción puesta en ejercicio por la parte Actora se encuentra debidamente prevista en el artículo **1º** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de impugnación, como los medios de defensa que hizo valer las Autoridades Demandadas, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia, misma que se transcribe y que a la letra dice:

*No. Registro: 196,477. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129.
Página: 599*

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas que han sido admitidas por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes.

Pruebas ofertadas por la parte actora:

1. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Recibo Oficial de Pago **A25217778**, emitido por la Autoridad Hacendaria Estatal en favor de la Accionante del presente juicio, donde se le reconoce el carácter de propietario del vehículo identificado con el número de placas de circulación **JMN1558**, mismo que resultó idóneo para acreditar el interés jurídico que le asiste y al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos **399, 400 y 413**, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

2. Elemento Técnico: Consistente en la impresión del adeudo vehicular, respecto del vehículo identificado con el número de placas **JMN1558**. Medio de prueba al que es posible otorgarle valor probatorio de conformidad a lo establecido por el artículo **298 fracción X, 406 bis y 418** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; en virtud de que la información que de él se desprende, fue obtenida a través de una página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Documental Privada: Consistente en el acuse de recepción de la Solicitud debidamente elevada por el actor ante las autoridades demandadas, mediante las cuales se solicitó la expedición de las copias de las resoluciones impugnadas, medios de convicción al que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo **403** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

4. Presuncional Legal y Humana: A la que se le otorga valor probatorio de acuerdo con los numerales **415 y 417** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

5. Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto por el arábigo **402** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada de la Secretaría de la Hacienda Pública:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35 fracción VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35 fracción VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos 35 fracción VIII de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el 417 del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos 35 fracción VIII de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el 417 del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

VII. ESTUDIO DE LA CASUAL DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio del fondo de las cuestiones que son planteadas al que resuelve, con fundamento en lo establecido por el artículo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual dispone: "...el sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera etapa procesal, incluyendo la sentencia definitiva...", en ese sentido, es que este Juzgador, debe analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas por las partes, así como las que este Juzgador pudiera estimar actualizadas oficiosamente; siguiendo esa línea de ideas, este Magistrado Instructor se avoca al estudio de la causal de improcedencia que la Directora Contenciosa de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco estimo actualizada en la presente causa, misma que consiste en las hipótesis contemplada en la fracción IX del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 1 de la Ley antes citada, al argumentar que no procede el presente juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general toda vez que fue una ley emanada por el Congreso y por ende que debió de haberla combatido mediante la interposición de una demanda de amparo indirecto y no mediante juicio de nulidad en materia administrativa.

Es inatendible el argumento aducido por la autoridad demandada. En ese sentido, quien esto resuelve, considera que ese tema atañe al estudio de fondo del presente asunto, ya que es en esta parte de la resolución en que deberá analizarse si los créditos fiscales por conceptos de refrendo anual de placas vehiculares que se combaten, cumplen con el orden de legalidad.

Como se dijo, es en esta parte del dictado de la presente resolución, donde se determinará si la autoridad exactora respeto la garantía a los principios de justicia tributaria que el peticionario de nulidad estimó vulnerados en su perjuicio al momento de interponer el presente juicio de nulidad en materia contencioso administrativo, pues resulta contrario a la técnica del juicio de nulidad, aludir a una causal de improcedencia alegando razones que involucran aspectos íntimos a la eficacia o no de los conceptos de nulidad esgrimidos por la parte actora, ya que ello implicaría, indefectiblemente, un estudio de la materia de fondo, lo que no es dable atender en este momento, dado que ese punto sólo puede abordarse una vez superado el análisis de las causales de improcedencia que se hagan valer.

Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P.J.J. 135/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 5, Tomo XV, Enero de 2002, que dice:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”.

Ahora, el suscrito Magistrado avoca al estudio de la causal de improcedencia que de oficio se advierte, misma que se hace consistir en la hipótesis jurídica prevista por la fracción **XII del numeral 29** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el diverso ordinal **3, fracción II inciso a)** del mismo cuerpo normativo, respecto de la cual, se sostiene esencialmente que no le reviste el carácter de autoridad demandada a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en virtud de no haber emitido ninguno de los actos administrativos materia de controversia en el presente juicio, la fecha de emisión de los tres actos combatidos es anterior a la vigencia del Decreto **27342/LXII/19**, mismo que modificó el contenido del artículo **198** de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; en ese contexto, toda vez que en términos del numeral en cita, antes de dicha reforma establecía que la competencia para la emisión de las cédulas de infracción correspondía a la Secretaría de Transporte, en consecuencia no debe de revestirle a la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, el carácter de demandada.

Por ello, se estima que se encuentra plenamente acreditada la causal de improcedencia aludida, en virtud que la acción ejercitada por la parte actora, versa sobre un acto competencia del personal adscrito a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en ese sentido, se concluye que no debe revestirle el carácter de autoridad demandada a la **SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, en virtud de que no ordeno ni emitió ni tampoco se encuentra ejecutando el cobro coactivo de las señaladas infracciones, ello atendiendo a lo establecido por el artículo **3 fracción II, inciso a)**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que establece que el demandado, tendrá ese carácter cuando la autoridad dicte las resoluciones impugnadas, por ende resulta operante la causal de improcedencia en estudio y se **DECRETA EL SOBRESEIMIENTO** del presente juicio únicamente respecto de la autoridad demandada citada con anterioridad.

VIII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. Sin que de oficio se advierta la existencia de causal de improcedencia alguna por resolver, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la litis en los términos previstos por los ordinales **72 y 73** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Como una noción de primer orden, acorde a lo estipulado en la fracción **I** del segundo de los arábigos invocados en el párrafo anterior, debe precisarse que los actos controvertidos en la presente instancia resultan ser las cédulas de notificación de infracción identificadas con los números de folio **113/294847553, 113/275716251, 113/295923121, 113/280455296 y 113/7137509**, y el cobro por el refrendo anual vehicular referente a los ejercicios fiscales **2018, 2019 y 2020**, así como sus accesorios; todos estos actos recaídos al vehículo identificado con el número de palcas **JMN1558**.

Ahora bien, este Juzgador estima pertinente que el estudio de la presente controversia se aborde en tiempos diversos, acorde a la naturaleza de los actos impugnados en comentario, y en atención a la causa de pedir plasmada por la parte actora en su escrito de demanda; en ese contexto, primeramente se analizará la validez de las cédulas de infracción mencionadas y con posterioridad lo relativo al cobro del refrendo anual de tarjeta de circulación en cuanto al argumento planteado por violaciones a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Fijados los actos impugnados, esta autoridad jurisdiccional procede a realizar un análisis de la demanda interpuesta, ya que la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, el artículo **35** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ni algún otro precepto contenido en dicho ordenamiento, que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda. Robustece el criterio asumido por esta autoridad, la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que encuentra aplicación analógica.

Época: Novena Época. Registro: 1003972. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Sexta Sección - Procedimiento del amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 2093. Página: 2410

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.

La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.

Así pues, se tiene que la parte actora en su escrito inicial de demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos impugnados el día **15 quince de diciembre del año 2022 dos mil veintidós**, cuando se hizo conocedor del adeudo que se encontraba registrado a cargo del vehículo de su propiedad identificado con el número de palcas **JMN1558**, motivo por el cual, como lo acredita con los medios de convicción ofertados al presente sumario, elevó las solicitudes de expedición de información ante las hoy demandadas con la finalidad de que le fueran dados a conocer los actos materia de la presente controversia, instancias que a la fecha de la presentación de la demanda no han sido atendidas, por ello, acude ante este Tribunal a solicitar la nulidad de los actos impugnados pues las resoluciones combatidas no le fueron dadas a conocer.

Analizadas las piezas de actuaciones, este Juzgador estima que en el caso concreto, ante la manifestación vertida por la Parte Actora en sentido de desconocer el contenido documental de las mencionadas cédulas de notificación de infracción, **invariablemente resultaba una obligación para las Autoridades emisoras, exhibir a juicio ya sea en original o en copia certificada dichos actos**, pues de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante ese supuesto -cuando un actor se manifiesta desconocedor del acto administrativo que impugna- al momento de contestar la demanda la Autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto se encuentra obligada a exhibir la constancia que acreditara su existencia, así como aquellas relativas a su notificación.

En ese contexto, atendiendo a que ninguna de las Demandadas dio cumplimiento a dicha carga procesa, el suscrito Magistrado concluye que incumplieron la obligación que le impone el numeral **286** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismo que conmina a la Parte Accionante de un procedimiento judicial a acreditar los elementos constitutivos de su acción y así mismo, al Demandado de acreditar sus excepciones, por lo que, al haber incumplido con tal obligación, dicha omisión conlleva la declaración de la nulidad lisa y llana de las cédulas de infracción que les fueron atribuidas, en razón, insístase, por no ofrecer los medios necesarios para acreditar su existencia. Robustece el criterio adoptado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, las siguientes Jurisprudencias:

Época: Novena Época. Registro: 170712 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 209/2007, Página: 203

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.

Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

ampliaria, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.

Época: Décima Época. Registro: 160591. Instancia: SEGUNDA SALA. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro III, Diciembre de 2011. Tomo 4. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 173/2011 (9a.) Pag. 2645

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA SALA

Determinado lo anterior, ahora este Juzgador analiza lo hecho valer por la parte actora en su escrito de demanda, en donde sustancialmente se duele en contra del cobro relativo al derecho por concepto de refrendo vehicular el cual manifiesta resulta inconstitucional, inequitativo y desproporcional.

Se tiene que a través del motivo de nulidad en comentario, la demandante arguyó de forma medular que el cobro que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco le efectuó respecto al automóvil de su propiedad por concepto del derecho de Refrendo Anual Vehicular de los ejercicios fiscales que van del año **2018 al 2020** resulta violatorio del artículo **31 fracción IV** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues afirma que dicho cobro no se ajusta a los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria.

En tales condiciones, se colige que -de manera sustancial- en el concepto de impugnación en escrutinio la demandante adujo haber resentido violaciones a su garantía de legalidad tributaria, ello al afirmar que el cobro materia de controversia fue efectuado con sustento en un precepto normativo que transgrede los principios de proporcionalidad y de equidad consagrados en el arábigo **31 fracción IV** Constitucional.

Por su parte, y en relación con tales argumentos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco se excepcionó manifestando que el argumento anterior resulta infundado, pues refirió que el servicio prestado por el Estado y que se contempla en el artículo **23 fracción III inciso a)** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para **2020** dos mil veinte, es distinto a aquel previsto en la fracción **III bis**, pues la primera de las fracciones cobra la tarifa por concepto de refrendo y emisión de la calcomanía de identificación vehicular, mientras que la segunda de dichas hipótesis excluye la expedición de la calcomanía aludida, situación que a criterio de la enjuiciada deja en evidencia que el servicio prestado no resulta similar y de ahí encuentre justificación el establecimiento de tarifas diferenciadas.

Aunado a lo anterior, sostiene que el servicio prestado por el Estado y que se contempla en el artículo **23 fracción III inciso a)** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios **2018 y 2019**, no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad pues contrario a lo alegado por el particular la prestación del servicio a que nos referimos implica un despliegue técnico para el estado que resulta diverso en tratándose de las diversas hipótesis contempladas en el numeral en cita, de ahí que se justifique la aplicación de una tarifa distinta para cada una de ellas.

Ahora bien, esclarecidas las posturas medulares asumidas por las partes, es menester precisar que si bien los Juzgadores de Amparo son quienes cuentan con competencia originaria para efectuar el control concentrado de la constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas generales, lo cierto es que esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco cuenta con facultades para llevar a cabo un control difuso respecto a la constitucionalidad de la disposición legal que sirvió de sustento a la Autoridad Demandada para efectuar el cobro del derecho combatido por la demandante; ello



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

con fundamento en lo establecido por los numerales 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a lo anterior, es menester señalar que en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, y bajo esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º Constitucional ante citado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro-homine*, o pro-persona.

Así pues, es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

Ilustrativo de lo anterior resulta la siguiente jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"...POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS COSSÍO DÍAZ, FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ZALDÍVAR LELO DE LARREA, VALLS HERNÁNDEZ, SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ORTIZ MAYAGOITIA Y PRESIDENTE SILVA MEZA, se determinó que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511. Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución Federal, propuesto por el señor Ministro Cossío Díaz, es en el sentido de que: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Y 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. Votaron en contra los señores Ministros: AGUIRRE ANGUIANO, PARDO REBOLLEDO, por estimar que ésta no es la instancia adecuada para realizar este análisis, y AGUILAR MORALES, por la razón aducida por el señor Ministro Pardo Rebolledo". Es el resultado de la votación del tema concreto que estamos abordando. Señor Ministro Cossío Díaz..."

En estas condiciones, tenemos que el control de constitucionalidad y de convencionalidad debe ser entendido como el control que ejercen los órganos jurisdiccionales internos de un Estado, en relación con su Constitución y con los convenios y Tratados Internacionales ratificados por éste, de tal modo que, la normativa interna debe estar en armonía con la externa.

Y lo cierto es que en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del día 14 catorce de julio de 2011 dos mil once, dispuso que es deber de todos los jueces nacionales tomar en consideración, al momento de dictar sus sentencias, el texto de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por México; lo anterior, sólo para efectos del caso concreto, y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; tal y como puede apreciarse a continuación:

"Registro No. 160525. Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011. Página: 552. Tesis: P. LXIX/2011(9ª.). Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de

Página 8 de 18



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

En estas condiciones se hace patente que, ante los argumentos esbozados por la parte actora en el sentido de que los numerales de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco donde se contempla el cobro por el servicio que por esta vía se combate no respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria estipulados por el artículo 31 fracción IV Constitucional, este Tribunal cuenta con facultades para poder llevar a cabo un ejercicio de control difuso respecto a la constitucionalidad de dicha porción normativa, ello acorde a las consideraciones que se contienen en la siguiente jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal:

Época: Décima Época. Registro: 2006186. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Si bien es cierto que, acorde con los artículos 10. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expuestos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando



respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Sentado lo anterior, se considera oportuno realizar un análisis de los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, siendo pertinente destacar que el numeral **31 fracción IV** Constitucional señala que los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Del dispositivo en mención, el cual encuentra su correlativo en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el arábigo **5 fracción I**, se desprenden algunos principios que rigen el sistema tributario, a saber: a) que se encuentren establecidos en una ley, b) Que los mismos sean destinados para el gasto público, y c) Que resulten proporcionales y equitativos en cuanto a su determinación y cobro.

Partiendo de ello, es de explorado derecho que el principio de proporcionalidad, de forma general, se refiere a que los sujetos pasivos de la relación tributaria, deben contribuir a los gastos públicos en función a su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de conformidad a sus ingresos, de este modo lo que se busca es que las personas que obtienen más ingresos tributen de forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Por lo que, para lograr su efectivo cumplimiento, se establecen tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

Asimismo, el principio de equidad tributaria, radica medularmente en la igualdad ante la Ley de todos los sujetos pasivos de una misma contribución, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico, respecto del mismo supuesto de causación, exención, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros, debiendo variar únicamente respecto de las tarifas tributarias aplicables, ello en respeto a su correlativo principio, ya anunciado. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Registro: 232197. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 199-204. Primera Parte Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: Página: 144

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

En esas condiciones, no debemos perder de vista que el cumplimiento a los principios tributarios a los que alude la Parte Actora, es distinto en tratándose de los impuestos, pues en el caso que nos ocupa nos encontramos ante un derecho por servicios, que, de conformidad al artículo 7 fracción II del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece como: "II. Derechos. - Las contraprestaciones establecidas en la Ley, por los servicios que preste el Estado en su función de Derecho Público". Por lo que se puede concluir que los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la Hacienda Pública como precio de los servicios de carácter administrativo prestados al contribuyente, por lo que, para atender a su proporcionalidad y equidad, debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, de donde se sigue que las cuotas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Así, para que los derechos cumplan con los requisitos de equidad y proporcionalidad, debe existir un equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general. En consecuencia, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera la obligación de su pago, la cual permitirá decidir, si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar el servicio relativo.

Época: Novena Época. Registro: 196934. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII. Enero de 1998 Materia(s): Administrativa Constitucional. Tesis: P./J. 2/98 Página: 41

DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.

Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Así pues, para efecto de estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponde, esta autoridad, estima necesario invocar el contenido literal del artículo 23 fracción III de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, (este de manera ejemplificativa ya que su análogo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para 2018 únicamente difiere en el monto de la tarifa establecida para cada uno pero en esencia son de similar redacción) así como el diverso ordinal 23 fracción III de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, mismos que son del tenor siguiente:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019

Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría del Transporte y,

Página 11 de 18



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

en su caso, la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

- a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques: \$590.00
- b) Motocicletas: \$168.00
- c) Placas de Demostración: \$1,431.00

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

(...)

III. Por refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:

- a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público: \$649.00
- b) Placas de demostración: \$1,574.00

Tratándose de la calcomanía de identificación vehicular sus características deberán de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de junio de 2016.

III Bis. Por refrendo anual de motocicletas: \$260.00

El refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular.

Tratándose de vehículos fabricados con sistema de propulsión híbrido sin considerar los modificados o hechizos, pagarán el 50%, por derecho de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular previsto en la fracción III de este artículo, en el caso de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de los derechos referidos.

Los pagos previstos en las fracciones III y III Bis de este artículo deberán efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2020 dos mil veinte.

Así pues, de la exégesis de los artículos y apartados aquí transcritos, este Juzgador advierte que la cantidad que la Autoridad Demandada determinó y efectuó por el cobro del Derecho de Refrendo Anual por los ejercicios fiscales que corren del año 2018 al 2020, para el vehículo propiedad del demandante resultó ser inequitativo y desproporcional, toda vez que el monto cobrado no trasciende al verdadero costo que para la autoridad implicó el otorgamiento del servicio prestado.

Esto así, ya que el mencionado cobro se realizó tomando como base el tipo de vehículo que se registra, elemento que transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, el tipo de vehículo que se registra es un elemento ajeno a la actividad realizada por la autoridad para la expedición del refrendo anual de registro, mismo que no trasciende al costo del servicio prestado; pues el hecho de que sea un automóvil, una camioneta, una motocicleta o placas de demostración, no implica mayores costos materiales ni humanos para el Estado por el refrendo o registro de los mismos; **RAZÓN QUE RESULTA SER SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INEQUITATIVO Y DESPROPORCIONAL EL COBRO DE DICHO CONCEPTO CON**



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO AQUÍ SEÑALADO.

Las consideraciones anteriores se encuentran sustentadas en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismas que resultan ser de observancia obligatoria para este Juzgador, y que a la letra señalan:

Época: Décima Época. Registro: 2016855. Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54. Mayo de 2018, Tomo II Materia(s): Común. Tesis: PC.III.A. J/41 A (10a.) Página: 1811

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.

Registro digital: 2016854. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época
Materias(s): Común, Administrativa. Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.).
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1810. Tipo: Jurisprudencia

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO.

El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados.

Al imponernos del contenido de las jurisprudencias anteriores (y de las ejecutorias correspondientes) se advierte que el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito arribó a la conclusión de que los artículos **22, fracción III, y 24, fracción III**, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, el primero correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, y el segundo numeral, correspondiente a los ejercicios de dos mil doce a dos mil quince, son violatorios del artículo **31, fracción IV**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establecen el cobro de derechos por servicios relativos al refrendo anual y holograma, sin respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Según se precisó, ello es así porque los indicados preceptos legales cuantifican el monto de dicha contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, pues no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma.

Así como tampoco consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios.

Dicho lo anterior, al resultar ser en esencial similares los ordinales que contemplan el servicio aludido relativo a los ejercicios fiscales **2018 y 2019**, este Juzgador estima que el criterio plasmado en la Jurisprudencia invocada resulta de aplicación obligatoria, por ello es dable considerar que el vicio detectado subsiste, debiendo como consecuencia resolverse lo conducente a la luz de la conclusión a la cual arribó el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Del análisis del preinserto numeral **23** las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal de **2020**, se logra colegir que, en similar circunstancia a las analizadas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ese arábigo transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la **fracción IV** del artículo **31** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, porque los indicados preceptos legales cuantifican el monto de dicha contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, no toma en cuenta el "costo de la actividad" basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro. Y tampoco considera la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios.

Por el contrario, se fija el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferenciados en cuanto a su tipo, dimensiones y uso.

De ahí que, con base en las premisas apuntadas, es dable concluir que el precepto legal en escrutinio trasgrede los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria previstos por el artículo **31, fracción IV**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto que la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar su correlación con el monto de la cuota a pagar, que es precisamente el sistema propio de los derechos por servicios que rigen su proporcionalidad y equidad.

En efecto, por la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabida por todos los usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular; y debido a la simplificación de esos trámites, mediante meras deducciones, es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado, **requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores, así como al cobro respectivo por el refrendo anual que hace constar la convalidación del registro.** Es decir, el propietario



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

del vehículo, únicamente, deberá acudir a la oficina recaudadora estatal correspondiente, mencionar su número de placas y nombre del propietario de la unidad, realizar su pago y recibir el comprobante de pago; incluso, dicho trámite se puede realizar en línea, a través del sitio oficial de internet del Gobierno del Estado de Jalisco.

Así, en la ejecución del aludido servicio público, por su naturaleza misma, es indudable que existe un limitado despliegue técnico similar para todos los vehículos, al margen de sus dimensiones, tipo y uso; es más, en el trámite relativo no se requiere presentarlos ante la autoridad. En otras palabras, el servicio que realiza el Estado, sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares, que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos, lo que permite colegir con certeza que el legislador local hace una distinción indebida entre contribuyentes, en función del tipo, dimensiones y uso de los vehículos, empero, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad en la prestación del servicio sea diferente; por ejemplo, cuando se realizan revisiones mecánicas en otro tipo de servicios que presta el Estado, en cuyo caso sí resulta útil atender las particularidades de los vehículos, por requerir una diversidad de despliegue técnico; y de ahí que no existe ninguna razón válida que justifique dicho trato diferenciado en las normas impugnadas.

Por tanto, si el servicio ejecutado en el caso de trato, es análogo para todos los vehículos enumerados con antelación, con independencia de su tipo, dimensiones y uso; entonces, estos factores no dan certeza del costo real buscado para fijar cuotas iguales a quienes reciban servicios análogos, pues en la prestación de dicho servicio no varía la actividad que realiza el Estado; y siendo ese el criterio del legislador inmerso en las disposiciones legales en cuestión, debe declararse la inconstitucionalidad de los actos en los cuales se aplican las referidas disposiciones legales que contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

No se soslaya que los preceptos referidos en la presente instancia, establecen que el refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación, sin incluir calcomanía de identificación vehicular -esto para el año 2020- así como contemplar la expedición de la tarjeta de circulación en material de papel -esto para el ejercicio fiscal 2021- sin embargo, tales circunstancias **NO SUBSANAN** la inconstitucionalidad de la norma, puesto que prevalece el cobro del refrendo y la expedición de tarjeta de circulación, sin atender al costo del servicio prestado, y sin que la autoridad justifique un despliegue técnico en correlación al costo del servicio, conforme a lo anteriormente explicado.

En atención a lo anterior, debe declararse que el artículo 23 fracción III, inciso a), de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, así como el diverso arábigo 23 fracción III inciso a) de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 dos mil veinte, transgreden en perjuicio del accionante los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; y por tanto debe ordenarse su **INAPLICACIÓN**.

Siendo oportuno precisar que si bien, se declaró la inaplicabilidad de las disposiciones normativas en comento, el efecto del presente fallo no puede traducirse en liberar a la demandante de la totalidad del pago del derecho por el servicio que le fue proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, De tal forma que, al preverse una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho violado sólo implica que a la demandante se le deba dejar de aplicar la tarifa establecida en las hipótesis señaladas en el párrafo anterior, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima contemplada en los ordinales en comentario.

Sirven de apoyo al criterio sustentado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia que a continuación se invoca:

Época: Novena Época Registro: 170499 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Administrativa, **SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.**

Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo.

Y por consiguiente, con fundamento en los artículos **75 fracción IV, y 76 inciso b)**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es procedente decretar la nulidad de los actos administrativos controvertidos, y condenar a la Autoridad Hacendaria Estatal a actualizar la tarifa por concepto del Derecho de Refrendo Anual, aplicado a la esfera jurídica de la actora las tasas contempladas en el **inciso b)** de la **fracción III** del artículo **23** de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para **2018 y 2019** y de la misma manera aquella contemplada por la **fracción III bis** del artículo **23** de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2020**.

Época: Décima Época Registro: 2000775 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 29/2012 (10a.) Página: 1244

DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVE EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUELLOS.

Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.".

En virtud de lo anterior, habiendo resultado procedente la acción intentada por la Parte Actora tanto para declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación impugnadas en el sumario que nos ocupa, como para declarar la nulidad del cobro por derecho de refrendo anual vehicular relativo a los ejercicios fiscales **2018, 2019 y 2020**, consecuentemente esta Sexta Sala Unitaria tiene a bien declarar la nulidad lisa y llana de la totalidad de los accesorios que derivan de tales actos como resultan ser recargos y actualizaciones por constituirse como frutos de actos viciados de origen. Resultando aplicable al caso en particular la siguiente Jurisprudencia:

Registro: 252103 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 121-126, Sexta Parte. Materia(s): Común; Página: 280

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también

Página 16 de 18



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

IX.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 8 numeral 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 4 numeral 1 fracciones I y III, numeral 2, y artículo 15 numeral 1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo.

De esta forma, los artículos 70 fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 8 numeral 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.

X. DECISIÓN. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 72, 73, 74 fracciones I, II, 75 fracción II y 76 inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente controversia a través de las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA. La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado debidamente acreditadas en autos.

SEGUNDA. La parte actora, **JOEL PÉREZ SALINAS**, acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción; las autoridades demandadas **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, la **SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, y la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, no acreditaron sus excepciones y defensas, en consecuencia:

TERCERA. Se declara la nulidad del cobro del crédito fiscal por concepto de Derecho de Refrendo Anual respecto del automotor identificado con el número de placa **JMN1558**, respecto de los ejercicios fiscales **2018, 2019 y 2020** y se condena a la Autoridad Hacendaria Estatal a actualizar la tarifa por concepto del Derecho de Refrendo Anual, aplicado a la esfera jurídica de la actora las tasas contempladas en el **inciso b) de la fracción III del artículo 23 de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para 2018 y 2019** y de la misma manera aquella contemplada por la **fracción III bis del artículo 23 de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020**; todo ello por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando **VIII**, de la presente resolución.



EXPEDIENTE: 213/2023
Sexta Sala Unitaria

**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

CUARTA. Se declara la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación de infracción identificadas con los números de folio **113/294847553**, **113/275716251**, **113/295923121**, **113/280455296** emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y de la cédula de infracción **113/7137509**, emitida por personal adscrito a la Dirección de movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, todas recaídas al vehículo identificado con el número de palcas **JMN1558**; por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando **VIII** de la presente resolución.

QUINTA. Se ordena a las Autoridades demandadas efectuar la cancelación de las resoluciones declaradas nulas y referidas en el punto anterior, así como sus respectivos accesorios, emitiendo el acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones relativas en las bases de datos o sistemas respectivos, informando y acreditando todo ello ante esta Sala Unitaria.

SEXTA. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio, únicamente por lo que ve al **SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando **VII** de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Así lo resolvió la **SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**, por conducto del ciudadano **MAGISTRADO PRESIDENTE MAESTRO ALBERTO BARBA GÓMEZ**, ante el **SECRETARIO PROYECTISTA, LICENCIADO VÍCTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA**, que autoriza y da fe.